



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

**19<sup>a</sup> REUNION – 11<sup>a</sup> SESION ORDINARIA**  
**15 DE AGOSTO DE 2002**

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor JUAN C. MAQUEDA, y del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado,  
don RAUL E. BAGLINI**

Secretarios:

**Señor JUAN C. OYARZUN y señor JORGE H. AMARFIL**

Prosecretarios:

**Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES**



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.  
ALPEROVICH, José J.  
ARANCIO, Lyliá M.  
AVELÍN, Nancy B.  
BAGLINI, Raúl E.  
BAR, Graciela Y.  
BARRIONUEVO, José L.  
BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.  
BUSTI, Jorge P.  
CAFIERO, Antonio F.  
CAPITANICH, Jorge M.  
CASTRO, María E.  
CHIAPPE, Lázaro A.  
COLAZO, Mario J.  
COLOMBO, María T.  
CONTI, Diana  
CURLETTI, Mirian B.  
DANIELE, Mario D.  
ESCUDERO, Sonia M.  
FALCÓ, Luis  
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.  
GIOJA, José L.  
GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.  
GUINLE, Marcelo A. H.  
HALAK, Beatriz S.  
ISIDORI, Amanda M.  
LAMBERTO, Oscar S.  
LATORRE, Roxana I.  
LOSADA, Mario A.  
MAESTRO, Carlos  
MAQUEDA, Juan C.  
MARTÍ, Rubén A.  
MARTÍN, Floriana N.  
MAYANS, Miguel Á.  
MENEM, Eduardo  
MERA, Mario R.  
MORALES, Gerardo R.  
MORO, Eduardo A.

MÜLLER, Mabel H.  
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.  
OCHOA, Raúl E.  
PARDAL, Jorge A.  
PARDO, Ángel F.  
PAZ, Elba A.  
PERCEVAL, María C.  
PICHETTO, Miguel Á.  
PRADES, Carlos A.  
RASO, Marta E.  
SALVATORI, Pedro  
SAPAG, Luz M.  
SEGUÍ, Malvina M.  
TAFFAREL, Ricardo C.  
USANDIZAGA, Horacio D.  
VERNA, Carlos A.  
WALTER, Pablo H.  
YOMA, Jorge R.

AUSENTES:

FERNÁNDEZ, Nicolás A.  
GALLIA, Sergio A.  
JENEFES, Guillermo R.  
LESCANO, Marcela F.  
OVIEDO, Mercedes M.  
PASO, Juan C.  
PUERTA, Federico R.  
ZAVALÍA, José

AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel L.  
GÓMEZ DIEZ, Ricardo  
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.  
MAZA, Ada M.

CON LICENCIA POR ENFERMEDAD:

IBARRA, Vilma L.

CON LICENCIA:

TERRAGNO, Rodolfo

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 4565.)
2. **Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar director del Banco Central al licenciado Rafael Norberto Iniesta.** (Pág. 4565.)

Asuntos entrados:

- I. **Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.** (Pág. 4565.)
- II. **Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar director del Banco Central al licenciado**

**Rafael Norberto Iniesta** (P.E.-300/02). (Pág. 4565.)

- III. **Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando** el dictado del decreto 1.399/02, **fijando el cronograma** para la **elección presidencial** (P.E.-293/02). (Pág. 4565.)
- IV. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo con la Agencia Espacial Europea** referente a la **Cooperación Espacial para Usos Pacíficos**, suscrito en Buenos Aires, el 11 de marzo de 2002 (P.E.-294/02). (Pág. 4567.)
- V. **Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo con la Corporación Andina de Fo-**

**vección e Investigación contra la Sustracción y Tráfico de Niños** (S.-621/02). Se aprueba. (Pág. 5034.)

87. **Consideración del dictamen de la Comisión de Familia y Minoridad en el proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller por el que se crea el Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados** (S.-632/02). Se aprueba. (Pág. 5037.)

88. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Paz por el que se declara de interés el X Congreso Nacional de Apresid en Los Rastrojos y más allá de Los Rastrojos, a llevarse a cabo en Rosario, Santa Fe** (S.-1.671/02). Se aprueba. (Pág. 5040.)

89. **Consideración sobre tablas el proyecto de comunicación de la señora senadora Lezcano por el que se solicita el envío de fondos destinados a los programas de Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Formosa** (S.-1.361/02). Se aprueba. (Pág. 5041.)

90. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se declara de interés cultural la III Asamblea General de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina** (S.-1.563/02). Se aprueba. (Pág. 5042.)

91. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Jenefes y otros señores senadores por el que se adhiere a la celebración del 190º aniversario del Exodo Jujeño** (S.-1.742/02). Se aprueba. (Pág. 5044.)

92. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Müller y otros señores senadores por el que se declara de interés legislativo el III Curso Bonaerense de Actualización de Ciencias Aplicadas al Deporte** (S.-1.382/02). (Pág. 5045.)

93. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Müller por el que se declara de interés parlamentario el Curso de Gestión Ambiental de Sustancias y Residuos Peligrosos (Aspectos técnicos y legales), organizado por la Universidad de Morón** (S.-1.383/02). Se aprueba. (Pág. 5045.)

94. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se declara de interés deportivo y cultural la realización de una nueva edición del Gran Premio de la Her-**

**mandad Argentino-Chilena** (S.-1.732/02). Se aprueba. (Pág. 5046.)

95. **Consideración sobre tablas el proyecto de resolución del señor senador Guinle por el que se solicita se deje sin efecto el incremento a los combustibles líquidos dispuesto por la resolución 273/02** (S.-1.833/02). Se aprueba. (Pág. 5047.)

96. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de los señores senadores Moro y Curletti por el que se solicita se garantice el llamado a audiencias públicas en la renegociación de los contratos de las empresas de servicios privatizados** (S.-1.916/02). Se aprueba. (Pág. 5048.)

97. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Losada por el que se dispone la creación de una aduana en Oberá, Misiones** (S.-749/02). Se aprueba. (Pág. 5050.)

98. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Brizuela del Moral por el que se solicita se incluya a los municipios en la refinanciación y garantía de las deudas que las provincias tienen con los bancos** (S.-1.851/02). Se aprueba. (Pág. 5051.)

99. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller y otros señores senadores por el que se declara a la provincia de Jujuy como Capital Honorífica de la Nación Argentina, al conmemorarse el 23 de agosto de cada año la gesta del Exodo Jujeño** (S.-1.846/02). Se aprueba. (Pág. 5052.)

100. **Insertión solicitada por el señor senador Guinle con relación al proyecto contenido en el expediente S.-1.833/02.** (Pág. 5055.)

101. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Prades para considerar en la próxima sesión con o sin despacho de comisión el proyecto de ley del señor senador Prades y otros señores senadores por el que se ratifica el artículo 1º del decreto 1.034/02 por el que se rescinde la concesión integral del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio** (S.-1.321/02). Se aprueba. (Pág. 5055.)

102. **Moción de preferencia formulada por la señora senadora Colombo para considerar la próxima sesión con despacho de comisión el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo por el que se solicita que se reconozcan inversiones de la pro-**

vincia de Catamarca en el **paso internacional de San Francisco** (S.-792/02). Se aprueba. (Pág. 5057.)

103. **Moción de preferencia** formulada por la señora senadora Colombo para considerar en la próxima sesión con despacho de comisión el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo por el que se solicita se dé prioridad en la ejecución del presupuesto 2002 al convenio para la construcción de viviendas económicas en Catamarca (S.-796/02). Se aprueba. (Pág. 5057.)

104. **Moción de preferencia** formulada por la señora senadora Castro para considerar en la próxima sesión con despacho de comisión el proyecto de ley de la señora senadora Gómez de Bertone y otros señores senadores referido al cupo sindical femenino (S.-1.542/02). Se aprueba (Pág. 5057.)

105. **Apéndice:**

I. **Sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 5058.)

II. **Inserciones.** (Pág. 5067.)

—En Buenos Aires, a las 13 y 40 del jueves 15 de agosto de 2002:

**Sr. Presidente** (Maqueda). — Queda abierta la sesión.

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente** (Maqueda). — Invito al señor senador por Tierra del Fuego, Mario D. Daniele a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Daniele procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 2

### MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOLICITANDO ACUERDO ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente** (Maqueda). — Por Secretaría se dará lectura al mensaje ingresado por el Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo.

**Sr. Secretario** (Oyarzún). — (*Lee*)

“Poder Ejecutivo: mensaje 1.470/02 solicitando acuerdo para designar director del Ban-

co Central al licenciado Rafael Norberto Iniesta.”

—La lista de asuntos entrados es la siguiente:

## I

La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos:

De fecha 1º de agosto de 2002, designando a los senadores Lescano y Colazo para integrar la Comisión de Asesoramiento del Mercosur, en reemplazo de los senadores (m. c.) Alfonsín y Losada (DPP-68/02.) (*A sus antecedentes.*)

De fecha 6 de agosto de 2002, designando a los senadores Halak, Seguí, Mayans, Verna, Agúndez y Losada para integrar la Comisión de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones (ley 23.696) y a los senadores Capitanich, López Arias, Maza, Pichetto, Moro y Prades para integrar la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley 25.561, artículo 20). (DPP-69/02.) (*A sus antecedentes.*)

De fecha 6 de agosto de 2002, rectificando a partir del 6-8-2002 el decreto DPP-68/02 por el cual se designó a la senadora Lescano en la Comisión de Asesoramiento del Mercosur, nombrando en su reemplazo al senador Losada como integrante de la misma (DPP-70/02). (*A sus antecedentes.*)

## II

Buenos Aires, 14 de agosto de 2002.

*Al Honorable Senado de la Nación*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina, al licenciado don Rafael Norberto Iniesta (matrícula individual 7.785.641), de conformidad con lo establecido por el artículo 7º de la Carta Orgánica de dicha institución, para completar un período de ley.

Se acompaña el currículum vitae correspondiente al funcionario propuesto.

Dios guarde vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.470

EDUARDO A. DUHALDE.  
*Roberto Lavagna.*

—A la Comisión de Acuerdos.

## III

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.399



Por todo lo expuesto, convencida de que es tiempo de hacer llegar a las familias un programa que prevenga la comisión de los delitos vinculados a la sustracción de niños, niñas y adolescentes, invito a ustedes, mis pares, a acompañarme en la iniciativa sancionando el presente proyecto de ley.

*Lylia M. Arancio de Beller.*

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración en particular.

**Sra. Arancio de Beller.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.

**Sra. Arancio de Beller.** – Señor presidente: en función del quórum, que está muy ajustado, pido que se inserte en el Diario de Sesiones el mensaje que pensaba formular.

Por otra parte, quiero plantear una modificación en el artículo 3º, dado que se ha omitido considerar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de que pueda celebrar con la Nación convenios para aplicar este Programa Nacional contra la Sustracción de Niños.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

**Sra. Perceval.** – Señor presidente: pido la inserción del discurso que pensaba efectuar para apoyar este proyecto.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración los pedidos de inserción formulados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Se procederá en consecuencia<sup>1</sup>.

–Se enuncian y aprueban los artículos 1º y 2º.

–Se enuncia el artículo 3º:

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por la señora senadora Arancio de Beller.

–La votación resulta afirmativa.

–Se enuncian y aprueban los artículos 4º a 8º.

–El artículo 9º es de forma.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## 87

### REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION SOBRE MENORES EXTRAVIADOS

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Familia y Minoridad en el proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller por el que se crea el Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados. (Orden del Día N° 209.)

–El texto es el siguiente:

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Familia y Minoridad, ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Arancio de Beller (S.-632/02), creando el Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXTRAVIADOS

Artículo 1º – Dispónese la creación de un Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 2º – El registro tendrá como objetivos centralizar, organizar y conciliar la información de todo el país en una base de datos que contenga información unificada acerca de aquellos niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de aquellos que fueran localizados.

Art. 3º – El registro tendrá como función, también, diseñar políticas en materia de prevención e investigación de la sustracción y tráfico de niños y de la búsqueda y restitución de los mismos coordinando acciones con organismos públicos e instituciones privadas de todo el país y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de sus embajadas, consulados y representaciones en el exterior.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

Art. 4° – Todo funcionario de la administración pública, del Poder Judicial o del Ministerio Público que recibiera denuncias o información de extravío de niños, niñas y adolescentes, o que de cualquier modo tomare conocimiento de una situación como las descritas en el artículo 2°, deberá dar inmediata comunicación al registro de la forma que establezca la reglamentación de la presente ley.

En dicha comunicación deberá hacer constar:

- a) El nombre y apellido del niño, niña o adolescente afectado, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos que permitan su identificación;
- b) Nombre y apellido de los padres y domicilio habitual de los mismos;
- c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se lo vio por última vez o hubiera sido encontrado;
- d) Fotografía o descripción pormenorizada actualizada al momento de la emisión del informe respectivo;
- e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
- f) Registro papiloscópico.

Art. 5° – Deberá informarse, también, al Registro de Información sobre Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados aquellos casos de niños, niñas y adolescentes hallados cuyo paradero se desconocía, y de aquellos hallados cuya identidad no se conozca o presente dudas.

Art. 6° – Los funcionarios y autoridades a los que se refiere el artículo 4° deberán informar todas las circunstancias que pudieran contribuir a completar la base de información que posea el registro con el objeto de facilitar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes en situación de extravío.

Art. 7° – El Registro de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados funcionará las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año, incluso los días feriados e inhábiles.

Art. 8° – La reglamentación de la presente establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el registro, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos.

Art. 9° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizará el registro creado por la presente ley con los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y la Secretaría de Derechos Humanos.

Art. 10. – Invítase a las provincias a adecuar su legislación y normativas reglamentarias y de ejecución a las disposiciones de la presente ley.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 10 de mayo de 2002.

*Lylia M. Arancio de Beller. – Ada M. Maza. – Jorge A. Agúndez. – Liliana T. Negre de Alonso. – Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Mabel L. Caparrós. – Deolide C. Gómez de Bertone.*

## ANTECEDENTE

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

## REGISTRO NACIONAL DE INFORMACION SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXTRAVIADOS

Artículo 1° – Dispónese la creación de un Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Art. 2° – El registro tendrá como objetivos centralizar, organizar y conciliar la información de todo el país en una base de datos que contenga información unificada acerca de aquellos niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de aquellos que fueran localizados.

Art. 3° – El registro tendrá como función, también, diseñar políticas en materia de prevención e investigación de la sustracción y tráfico de niños y de la búsqueda y restitución de los mismos coordinando acciones con organismos públicos e instituciones privadas de todo el país.

Art. 4° – Todo funcionario de la administración pública, del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público que recibiera denuncias o información de extravío de niños, niñas y adolescentes, o que de cualquier modo tomare conocimiento de una situación como las descritas en el artículo 2°, deberá dar inmediata comunicación al registro de la forma que establezca la reglamentación de la presente ley.

En dicha comunicación deberá hacer constar:

- a) El nombre y apellido del niño, niña o adolescente afectado, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos que permitan su identificación;
- b) Nombre y apellido de los padres y domicilio habitual de los mismos;
- c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se lo vio por última vez o hubiera sido encontrado;

- d) Fotografía o descripción pormenorizada actualizada al momento de la emisión del informe respectivo;
- e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
- f) Registro papiloscópico.

Art. 5° – Deberá informarse, también, al Registro de Información sobre Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados aquellos casos de niños, niñas y adolescentes hallados cuyo paradero se desconocía, y de aquellos hallados cuya identidad no se conozca o presente dudas.

Art. 6° – Los funcionarios y autoridades a los que se refiere el artículo 3° deberán informar todas las circunstancias que pudieran contribuir a completar la base de información que posea el registro con el objeto de facilitar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes en situación de extravío.

Art. 7° – El Registro de Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados funcionará las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año, incluso los días feriados e inhábiles.

Art. 8° – La reglamentación de la presente establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el registro, de forma tal de garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso a los mismos.

Art. 9° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizará el registro creado por la presente ley con los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y la Secretaría de Derechos Humanos.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Lylia M. Arancio de Beller.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La realidad actual nos enfrenta a una problemática dolorosa y de imperiosa resolución: la sustracción y tráfico de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Realidad que, lamentablemente, nos aqueja cada vez con más frecuencia y que, por lo mismo, preocupa y moviliza a toda la sociedad: bebés, niños y adolescentes son sustraídos mediante maniobras diferentes de sus lazos, privándoseles de sus legítimos derechos a permanecer en el seno de su familia, a protegerse su vínculo materno filial, su dignidad, su integridad física y su vida.

Este hecho, la sustracción de menores, que es un delito en sí mismo, está necesariamente vinculado con la comisión de otros múltiples delitos, lo que lo hace más perverso y dramático. Ya que no constituye sólo un ilícito de magnitud, sino que es un factor multiplicador, y frecuentemente resulta ser el medio para la comisión de otros delitos como la venta y tráfico de niños, la prostitución y pornografía in-

fantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos.

Frente a la realidad reseñada, nosotros, desde nuestro rol de legisladores nacionales, debemos actuar con eficacia, eficiencia y celeridad, colaborando, con las herramientas con las que contamos, para terminar con el tráfico de niños, la apropiación de bebés, la prostitución y pornografía infantil, el abuso y muchos otros flagelos.

Para lo mismo debemos, luego de tomar contacto con los hechos y circunstancias, con las víctimas –los menores y su familia– y los procedimientos utilizados para el secuestro y sustracción de los niños, y para la búsqueda e investigación de esos sucesos, reconocer las necesidades y, consecuentemente llenar los baches legislativos.

Esa tarea que, cuidadosamente, he venido realizando desde hace tiempo reveló la imperiosa necesidad de crear un registro con alcance nacional de niños extraviados, que tenga como objetivos: centralizar, organizar y conciliar la información de todo el país en una base de datos que contenga información unificada acerca de aquellos niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de aquellos que fueran localizados.

Esto, con el fin de poder conocer la cantidad de niños víctimas de sustracción y tráfico, las zonas más vulnerables, los métodos y maniobras utilizados para la comisión de los delitos, y, para hacer posible el diseño de políticas en materia de prevención e investigación y de la búsqueda y restitución, coordinando acciones con organismos públicos e instituciones privadas de todo el país.

El registro, que por medio del presente proyecto se crea, deberá recibir la información que todo funcionario de la administración pública, del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio Público le remita en forma inmediata, para posibilitar la búsqueda y restitución del menor con celeridad.

Este mismo registro, el Registro Nacional de Información sobre Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados está proyectado en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya que ese organismo tiene a su cargo la diagramación de la política criminal de la Nación y, consecuentemente, la prevención del delito; y por otra parte, en el ámbito de dicha Subsecretaría funciona la Comisión de Trabajo Interdisciplinario para la Prevención de la Sustracción de Niños y de los Delitos contra su Identidad, la que fuera creada por resolución SPCyAP/26 del 10 de agosto de 2001.

Teniendo en cuenta que la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reiniciencia dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios cuenta con el Programa Nacional con las Provincias, el cual basa su funcionamiento en una red informática que posee terminales en todas las

provincias, denominadas Unidades de Expedición y Recepción (UER), a través de las cuales circula la información sobre antecedentes penales que la Justicia solicita y/o remite al registro. Que la mencionada dirección nacional ha manifestado su conformidad con poner a disposición de la Comisión de Trabajo Interdisciplinario para la Prevención de la Sustracción de Niños y de los Delitos contra su Identidad dicho sistema a fin de adecuarlo a los requerimientos que le son propios, y que la Secretaría de Derechos Humanos lleva una base de datos informatizada que puede ser utilizada también a los efectos de la centralización de la información que administrará la comisión ya citada, la posibilidad fáctica del funcionamiento correcto del registro es un hecho gratificante.

Hecho, que a la vez permite utilizar los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y la Secretaría de Derechos Humanos, y no crear una superestructura con los gastos y burocracia que ello implica.

El presente proyecto, que propicia la creación del Registro Nacional de Información sobre Niños, Niñas y Adolescentes Extraviados, es el resultado de una intensa labor que contó con el invalorable aporte de la Comisión de Trabajo Interdisciplinario para la Prevención de la Sustracción de Niños y de los Delitos contra su Identidad, que en forma sistemática, completa y expeditiva brindó la amplia experiencia de su trabajo y de su equipo abocado a la prevención de una problemática actual y acuciante. Por lo mismo, y convencida como este organismo de que es tiempo de proveer de herramientas que modifiquen la dura realidad, solicito a ustedes, mis pares, que me acompañen sancionando la presente iniciativa.

*Mónica Arancio de Beller.*

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración en particular.

–Se enuncia el artículo 1º:

**Sra. Arancio de Beller.** – Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Arancio de Beller.

**Sra. Arancio de Beller.** – Señor presidente: pido que en el artículo 10 se agregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la misma manera que en el proyecto anterior.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

**Sra. Perceval.** – Señor presidente: al igual que en el caso anterior, pido la inserción de mi

discurso en el Diario de Sesiones con el objeto de dejar fundamentado mi apoyo a este proyecto, con la modificación propuesta por la señora senadora Arancio.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – En consideración el pedido de inserción formulado por la señora senadora Perceval.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Se procederá en consecuencia<sup>1</sup>.

–Se enuncian y aprueban los artículos 1º al 9º.

–Se enuncia el artículo 10:

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Se va a votar el artículo 10 con la modificación propuesta por la señora senadora Arancio de Beller.

–La votación resulta afirmativa.

–El artículo 11 es de forma.

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

A continuación corresponde proponer los tratamientos sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.

88

## CONGRESO NACIONAL DE AAPRESID

**Sr. Presidente** (Maqueda). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Paz por el que se declara de interés el X Congreso Nacional de Aapresid, “En los rastros y más allá de los rastros”, a llevarse a cabo del 13 al 16 de agosto de 2002 en Rosario, Santa Fe.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente:

### Proyecto de declaración

*El Senado de la Nación*

DECLARA:

De interés legislativo el X Congreso Nacional de Aapresid, “En los rastros y más allá de los rastros”

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.



derecho internacional privado, porque en el tema de cómo ejecutar las sentencias duermen tranquilamente las casas matrices, pese a que ya se están iniciando acciones en los propios países de radicación de esas casas, como ocurre con España, según he visto el otro día por televisión.

En ese sentido, cualquier abogado litigante sabe que más allá de todo lo que se pueda aportar en un juicio, lo importante después es determinar qué se hace con la sentencia. Creo que esto es muy importante, porque pienso que deben alentarse absolutamente todas las expectativas que –por lo menos en principio– sepamos que pueden tener concreción.

Debo reconocer que soy un poco escéptico al respecto, entre otras cosas porque creo que no se hicieron las previsiones correspondientes cuando esas casas centrales abrieron sus sucursales o filiales en el país para que después pudiéramos, sin duda, ejecutar la sentencia.

**Sra. Presidenta.** – Tiene la palabra el doctor Otaegui.

**Sr. Otaegui.** – Con respecto al tema que yo he desarrollado sobre la responsabilidad por la actuación societaria en común debo reiterar algunos conceptos que manifestaron los doctores Rossi y González Arzac.

En primer lugar, la sociedad matriz que es titular de participaciones en la Argentina tiene que inscribirse en el Registro Público de Comercio y, en principio, es emplazable aquí. A su vez, también es demandable aquí, en la persona de la sociedad filial. ¿Por qué? Porque en una sociedad de hecho todos los socios representan a la sociedad y todos los socios se representan mutuamente, artículo 23 de la Ley de Sociedades.

Se plantea una última cuestión. La sentencia de un juez argentino, ¿es ejecutable en el exterior? De acuerdo a las reglas de derecho internacional privado, una sentencia es ejecutable en el exterior cuando se ha brindado el debido derecho de defensa.

**Sr. Vallespinos.** – Coincido con lo que mencionaba recién el diputado en cuanto a que las casas matrices no son las únicas responsables. Ello es así no solamente por la existencia de la ley específica, sino por el encuadramiento dentro de la Ley de Entidades Financieras. A su vez, estaba vigente una cuantía mínima que debían mantener las entidades bancarias para su funcionamiento, que paralelamente al tope de los 30 mil pesos o dólares, conformaba una garantía para los ahorristas.

También es cierto lo que decía recién el señor en cuanto a que las prestaciones de servicios están incluidas; lo que pasa es que lamentablemente no es esta la opinión de nuestros jueces ni de la doctrina, toda vez que no se trata de un acto de consumo, entendiéndose por tal el último de la cadena de producción, distribución, comercialización y extinción.

**Sr. González Arzac.** – Con respecto a la ejecución quiero aclarar que los convenios internacionales son los que rigen esta materia. Por ejemplo, los tratados de Montevideo con varios países de América latina rigen en la materia. Evidentemente, al grupo económico no sólo se le puede reclamar en su casa matriz. La responsabilidad de la casa matriz hace que una sucursal en Montevideo o en Porto Alegre esté incluida también en la responsabilidad de la casa matriz, de manera que son ejecutables conforme a la norma del Tratado de Montevideo. Y así sucesivamente, porque el país ha suscrito convenios internacionales con varias naciones y en cada caso será diferente la cuestión.

**Participante.** – Quiero hacer dos reflexiones.

Ante todo aclaro que soy director ejecutivo de una asociación de defensa de consumidores, con lo cual tal vez mis expresiones sean un tanto subjetivas, pero creo que hay una relación de consumo. El derecho administrativo lo ha receptado de esta manera. A su vez, hay una cuestión constitucional prevista en el artículo 42 que hace referencia al derecho a la información. La Ley de Defensa del Consumidor presenta la ventaja de su propio procedimiento, que es sumarisimo. No debemos dejar esto a un lado porque abrevia lo que será una segunda etapa, a fin de que la sentencia no sea un mero cuadro, sino ejecutable.

**Sra. Presidenta.** – Agradezco la presencia de todos ustedes en esta reunión. Un especial agradecimiento a los señores expositores y al doctor Facundo Viagos que ha hecho posible la realización de este evento.

Estoy segura de que la comisión que presido va a hacer suyas las conclusiones principales a que se arribó en este encuentro. Seguramente nos esperan tiempos de gran trabajo, toda vez que ha quedado evidenciado que probablemente sea necesario dictar o modificar algunas leyes. (*Aplausos.*)

–Son las 13 y 27.

4

**Solicitada por la señora senadora Avelín**  
(No fue enviada)

5

**Solicitada por la señora senadora**  
**Arancio de Beller**

Señoras y señores senadores:

La realidad de hoy nos enfrenta a una problemática dolorosa y de imperiosa resolución: la sustracción y tráfico de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Realidad que, lamentablemente, nos aqueja cada vez con más frecuencia y que, por lo mismo, preocupa y moviliza a toda la sociedad: bebés, niños y adolescentes son sustraídos mediante maniobras

diferentes de sus lazos, privándoselos de sus legítimos derechos a permanecer en el seno de su familia, a protegerse su vínculo materno filial, su dignidad, su integridad física y su vida.

Este hecho, la sustracción de menores, que es un delito en sí mismo, está necesariamente vinculado con la comisión de otros múltiples delitos, lo que lo hace más perverso y dramático. Ya que no constituye sólo un ilícito de magnitud, sino que es un factor multiplicador, frecuentemente, resulta ser el medio para la comisión de otros delitos como la venta y tráfico de niños, la prostitución y pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos.

Frente a la realidad reseñada, nosotros, desde nuestro rol de legisladores nacionales, debemos actuar con eficacia, eficiencia y celeridad, colaborando, con las herramientas con las que contamos, para terminar con el tráfico de niños, la apropiación de bebés, la prostitución y pornografía infantil, el abuso y muchos otros flagelos.

Para lo mismo, debemos, luego de tomar contacto con los hechos y circunstancias, con las víctimas –los menores y su familia– y los procedimientos utilizados para el secuestro y sustracción de los niños, y para la búsqueda e investigación de esos sucesos, reconocer las necesidades y, consecuentemente, llenar los baches legislativos.

Esa tarea que, cuidadosamente, he venido realizando desde hace tiempo reveló la imperiosa necesidad de crear un registro con alcance nacional de niños extraviados, que tenga como objetivos: centralizar, organizar y conciliar la información de todo el país en una base de datos que contenga información unificada acerca de aquellos niños, niñas y adolescentes de quienes se desconozca el paradero, así como de aquellos que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de aquellos que fueran localizados, valga el comentario que si el hecho no se denuncia como averiguación de paradero, la búsqueda no se inicia de inmediato en algunas provincias en las que la denuncia por desaparición del niño o adolescente no implican inicio inmediato de la búsqueda ante la presunción que se fue por propia voluntad.

Por esa razón he presentado el proyecto de ley S.-632/02, que corresponde al Orden del Día N° 209, creando el Registro Nacional de Información de los Menores Extraviados, y, como complemento, un proyecto de ley de creación, en todo el ámbito de nuestro país, de un Programa Nacional de Prevención e Investigación contra la Sustracción y Tráfico de Niños (S.-621/02), que corresponde al Orden del Día N° 208, mediante el cual magistrados, personal policial, miembros de las ONG que se ocupan especialmente de la sustracción de menores, serán accesibles a la comunidad toda, brindarán su conocimiento, formarán y capacitarán a quienes luego podrán enfrentarse al flagelo con herramientas que faciliten la eliminación de la problemática.

Convencida de que es tiempo de hacer llegar a las familias un programa que prevenga la comisión de los delitos vinculados con la sustracción de niños, niñas y adolescentes, y un registro que contenga información unificada sobre los niños extraviados, secuestrados o privados de sus vínculos familiares por alguna razón, he presentado estas iniciativas.

El programa pretende ser un ágil y eficaz sistema de prevención e investigación de la dura realidad que nos enfrenta con la desaparición o la separación de sus familias por la fuerza, lo cual victimiza a toda la familia.

El registro que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación coordinará acciones con organismos públicos e instituciones privadas de todo el país y se prevé que todo funcionario público de la administración pública, del Poder Judicial o del Ministerio Público, que reciba denuncias o información relacionada, deberá dar inmediata comunicación al registro que, tal como prescribe el proyecto, funcionará las 24 horas del día, todos los días del año, incluso feriados o inhábiles.

El rol del legislador es también adecuar nuestras leyes a la Convención sobre los Derechos de los Niños, con jerarquía constitucional desde la reforma del año 1994. Dicho acuerdo internacional estipula un sistema de protección, especialmente en su artículo 34, determina que el niño tiene derecho a ser protegido contra todas las formas de abuso y explotación sexual y en el apartado 35 concreta que tienen derecho también a ser protegidos contra el secuestro, la venta o trata de niños para cualquier fin.

Con estas propuestas considero que desde el bloque del Frente Cívico Jujeno cumplimos con el deber de legislar para proteger a los más frágiles, reconocer y atender el delito y prevenir injusticias.

## 6

### **Solicitada por la señora senadora Perceval**

Señor presidente:

Deseo expresar mi decidido acompañamiento y mi voto afirmativo a los proyectos presentados por la señora senadora Arancio de Beller, que tienen como objetivo la creación de un Programa Nacional de Prevención e Investigación contra la Sustracción y Tráfico de Niños/as y de un Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados.

Nadie ignora hoy la crudeza de una realidad que da cuenta de que uno de los más graves problemas que nos aqueja a todos/as es la transnacionalización e intensidad del crimen organizado.

No sólo en nuestro país sino en el mundo entero, el combate al terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas requieren voluntad política, coraje moral y solidaridad internacional.

En este sentido, es oportuno recordar lo que César Gaviria Trujillo, secretario general de la OEA, decía pocos meses atrás: “Estas formas de criminalidad pretenden aprovecharse de nuestras libertades, de nuestros sistemas políticos, de nuestro estado de derecho y, también, hay que decirlo, de nuestras limitaciones o debilidades institucionales”.

En el caso del tráfico de personas, los niños/as y los/as adolescentes son el sector de más alta vulnerabilidad de la sociedad.

La invisibilidad de este drama que viven los niños/as y los/as adolescentes así como también la indefensión en la que se encuentran son motivos suficientes para asumir la necesidad de asumir estos temas desde el Estado y la sociedad, con urgencia y profundidad.

Según los últimos informes del Congreso Mundial de Yokohama, Japón (diciembre de 2001), el tráfico y venta de niños y niñas, la prostitución y la pornografía infantil afectan a más de un millón de niños y niñas por año.

Entendemos por tráfico y venta de niños y niñas la acción de ofrecer, entregar o aceptar un niño o una niña con fines de explotación sexual, transferencia con fines de lucro de los órganos del niño o la niña o de trabajo forzoso del niño o la niña.

Para los niños y las niñas víctimas de esta “trata” resulta muy difícil buscar ayuda no sólo por su edad sino también porque frecuentemente están lejos de sus hogares o comunidades, con inmigrantes ilegales, tienen documentos falsos o carecen de ellos.

Construir una cultura de respeto a cada persona supone reconocer que los niños y las niñas son sujetos activos de derecho. Por ello, es imprescindible no ocultar más estos problemas, no negarlos, asumirlos, investigarlos, medirlos, denunciarlos. En definitiva “comprometerse”.

Es preciso fomentar en nuestro país el cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales apropiados que combaten estos delitos, tales como el Convenio 182 de la OIT sobre “eliminación de las peores formas de trabajo infantil” y el Protocolo Facultativo a la CDN sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil.

Es necesario impulsar, tal como lo expresan las iniciativas legislativas que hoy se debaten, estrategias y planes de acción coordinados con todos los actores sociales, que pongan énfasis en acciones preventivas y de formación sobre los derechos de los niños y las niñas y contribuyan a tomar conciencia de las múltiples causas que ponen a los niños y las niñas en riesgo. La pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia, la desintegración familiar, el HIV/sida, la demanda, el crimen organizado son indiscutibles factores de riesgo para los niños y las niñas.

Al afirmar que nuestros niños y nuestras niñas están en riesgo, corremos el riesgo de que algunos

crean que ello es obra del ciego destino y que estamos eximidos/as de preguntarnos, aquí y ahora, qué tipo de orden social hemos configurado y de plantear qué ideal social estamos dispuestos/as a hacer realidad.

En su último informe para América latina y el Caribe, el Instituto Interamericano del Niño de la OEA da cuenta de que, durante los próximos minutos que ocuparé en mi sintética exposición para apoyar estas iniciativas: 600 niños y niñas nacerán en las Américas, 200 serán pobres. En las Américas nace un niño o una niña cada 4 segundos, el 10 % no estará registrado al nacer (esto es, cerca de 800 mil niños o niñas no tendrán identidad).

Asimismo, si miramos los recientes datos de Siempre, advertimos que, en la Argentina, 7 de cada 10 niños y niñas y jóvenes viven en hogares pobres; que en nuestro país hay 12,5 millones de menores de 18 años y que el 69,2 % (es decir, 8,6 millones) viven en 3,3 millones de hogares pobres.

Estos datos son elocuentes por sí mismos para corroborar las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra nuestra población infantil y adolescente.

Frente a encendidos discursos y campañas mediáticas que quieren instalar la sensación de que nos debemos cuidar de los menores puesto que ellos constituyen una amenaza para nuestra seguridad, resulta un imperativo ético y una necesidad política cuidar a los menores pues son ellos quienes están sufriendo desmesuradamente los efectos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

Por cada chico menor de 18 años que es acusado por un delito en la provincia de Buenos Aires, hay otros dos que llegan a la Justicia como víctimas de violencia, abusos sexuales o en estado de desamparo, nos dice un informe del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En 1990, cuando la línea de pobreza era de 24 puntos, 252 mil niños y niñas entre 10 y 14 años trabajaban en nuestro país. Hoy, que se estima que el 52 % de la población vive bajo la línea de pobreza, esta cifra llegaría a 500 mil niños y niñas.

Si bien la pobreza no es la única causa que determina el trabajo infantil, otros factores se relacionan estrechamente en la medida en que son reproductores o reforzadores de la pobreza, tales como la desocupación y la falta de trabajo decente para los adultos, la discriminación, la emigración, la falta de seguridad y protección social adecuada, los déficit del sistema educativo y el consumismo como “cultura”.

Ninguno de estos elementos es ajeno a nuestra actual realidad. De allí que aun cuando no contemos con datos precisos y actualizados que den cuenta de la magnitud del trabajo infantil en la Argentina, no obstante, podemos inferir que éste se ha multiplicado y que no siempre se trata de un tra-

bajo consentimiento y apoyado por los padres y las madres, sino de las peores formas de explotación, las que frecuentemente están relacionadas con organizaciones criminales.

Sabemos que el desarrollo social no es posible sin equidad y justicia.

Sabemos que la democracia tiene pies de barro si la violación a los derechos humanos más elementales es permitida merced a actitudes y conductas permisivas, cínicas o indiferentes.

Estamos reconociendo, a través de estos proyectos, que hay niños y niñas víctimas de este delito que sufren los efectos más crueles de las formas contemporáneas de esclavitud.

Y porque estamos reconociendo que esta realidad existe es que, al mismo tiempo, estamos decidiendo que este flagelo deje de permanecer sumergido ante la mirada del Estado y silenciado por los ojos de la sociedad.

Estamos definiendo que la sustracción y tráfico de niños y niñas es un tema de la agenda pública y que un Programa Nacional de Prevención e Investigación contra este delito forma parte sustantiva de las políticas sociales de infancia.

Y subrayamos la necesidad de que este programa, en su concepción y desarrollo, forme parte de las políticas sociales de infancia y no corra la mala suerte de tantas iniciativas que por su aislamiento, superposición o desarticulación se convierten en formalidades vacías o ineficaces burocracias.

Aceptamos que el problema es complejo y multicausal. Que su resolución no es fácil ni sencilla.

Las organizaciones criminales que operan en los delitos de sustracción y tráfico de niños y niñas manejan recursos que muchas veces superan la totalidad del presupuesto asignado a las políticas de infancia en los países.

Por ello es que es altamente relevante que se puedan aunar esfuerzos entre los países para lograr los objetivos deseados. La Comisión de Equidad y Género del Parlamento Latinoamericano, de la cual soy miembro, el 26 de abril de 2002 en el primer punto de la Carta de Montevideo consigna la necesidad de “constituir el Frente Parlamentario Latinoamericano de Lucha contra el Tráfico y Venta de Niños y Niñas y Adolescentes y contra la explotación sexual, comercial y no comercial de la niñez y de la adolescencia.

Para terminar, señor presidente, quiero destacar una vez más mi coincidencia con los proyectos presentados por la señora senadora Arancio de Beller y ratificar mi voto afirmativo a los mismos.

Puesto que no se trata de convocar a la misericordia para con esos niños y niñas, ni de apelar a la vergüenza social que debería producir esta situación, sino de encontrar y poner en marcha respuestas jurídicas, instituciones justas y políticas integrales para lograr frenar el crecimiento de este delito e iniciar su prevención y tratamiento.

Celebro que este tema, tantas veces percibido como un tema “de otros”, sea ahora “de todos nosotros”.

Gracias, señor presidente.

7

### **Solicitada por el señor senador Moro**

La ley 25.561 de emergencia pública dispuso en sus artículos 8º, 9º, y 10 la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas prestadoras de servicios públicos. Cabe destacar al respecto que el segundo de los artículos mencionados fijó un conjunto de criterios básicos que debían guiar el curso de las renegociaciones contractuales, disponiendo que se tomaran en consideración “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos, y la rentabilidad de las empresas”. Posteriormente y en el marco del proceso de renegociación establecido, el decreto 370 del Poder Ejecutivo convocó a la participación de las asociaciones de consumidores, reservando un lugar en la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos.

Habiendo entrado el proceso de renegociación de los contratos en su etapa decisoria culminante, vuelve a plantearse la cuestión de la participación ciudadana. Ya el artículo 42 de la Constitución Nacional previó “la necesaria participación”, precepto que aún no ha sido reglamentado por el Congreso de la Nación. De igual forma, existen marcos regulatorios que prevén dicha participación, así como también opiniones doctrinarias y jurisprudencia que han tratado de darle forma a la “necesaria participación”.

Sin lugar a dudas, el mecanismo de la audiencia pública, contemplado en la regulación de algunos servicios, constituye un canal adecuado y eficaz, no sólo de participación ciudadana, sino también de ampliación de los mecanismos democráticos y de mayor transparencia en las decisiones estatales.

Dicho mecanismo está contemplado en la regulación de los servicios de gas y electricidad y las audiencias públicas son de convocatoria obligatoria para el tratamiento de ciertas cuestiones específicas, entre las que merecen destacarse las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos solicitados por transportistas, distribuidores o consumidores, conductas contrarias a los principios de libre competencia o abuso de situaciones derivadas de un monopolio natural o de una posición dominante en el mercado o para la resolución de conflictos entre un distribuidor o un transportista y un consumidor respecto de las condiciones de suministro de los servicios.

En otros casos, como en telecomunicaciones y en agua potable, las audiencias públicas pueden ser